

Las desigualdades regionales externas e internas y sus relaciones mutuas

Antonio García Lizana
Guillermina Martín Reyes
Antonio Fernández Morales

1. LAS DESIGUALDADES REGIONALES EXTERNAS E INTERNAS Y SUS RELACIONES MUTUAS

La constatación de las desigualdades regionales dentro de un mismo ámbito nacional puede decirse que forma parte de la raíz misma en la que se apoyó en su día el nacimiento y desarrollo de la Ciencia Regional. Sin embargo, aún estamos a la espera de una explicación global, suficientemente comprensiva y general que, aceptada por toda la comunidad científica, dé respuesta plena y satisfactoria a tal problema. En cualquier caso, el problema de la desigualdad interterritorial aún subsiste, sin que los intentos que una y otra vez se realizan consigan dar definitivamente en el blanco¹.

Williamson, en 1965, ya puso de relieve tal situación («se ha progresado muy poco en la formulación y comprobación de una explicación general de la existencia de desigualdad...»). Pero casi veinte años más tarde aún podía incidir en ella, por sólo citar un caso, S. Boisier (1982): «En cierto sentido (la mayor parte de las teorías existentes) no cuentan la historia completa del desarrollo o de la falta de desarrollo regional, responder, más al *cómo* y no tanto al *porqué*» (pág. 17).

Hoy, ocho años después, aún seguimos sin disponer —a pesar de los esfuerzos realizados— de esas explicaciones certeras y globales que tales autores demandaban.

Williamson, en el artículo aludido, tras advertir la existencia de desigualdades regionales en todos los países con independencia de su desarrollo, llegaba

¹ Las nuevas perspectivas abiertas a la política regional tras las crisis reiteradas de los setenta y la búsqueda afanosa de los ochenta, aparte de su corta experimentación, responden más a planteamientos empiristas ante una situación difícil, que a conclusiones derivadas de un análisis teórico sistemático. (Ver DEL RÍO, 1990, págs. 7 y sigs.)

a la conclusión de que la relación entre la mayor o menor amplitud de las desigualdades regionales y el propio proceso de desarrollo (medido por la renta por habitante) tiene mucho que ver con el nivel alcanzado por el mismo. Así, en las primeras etapas tiende a producirse un aumento de la desigualdad interregional, para estabilizarse después y decrecer más adelante en los períodos maduros de crecimiento².

Boissier, por su parte, hacía depender el desarrollo a largo plazo de una región —y por tanto los niveles diferenciales interregionales detectados— de tres tipos de «fuerzas»: de la participación relativa de la región en el uso de los recursos nacionales; de los efectos (regionales) de las políticas (nacionales) macroeconómicas y sectoriales; y de la capacidad de organización social de la propia región.

Años antes, G. Myrdal (1957) había tratado de explicar los desequilibrios regionales a partir de los desequilibrios económicos internacionales, por entender la existencia de una estrecha interrelación causal entre unos y otros.

Por nuestra parte, la *hipótesis de trabajo* que traemos a colación es la de que las desigualdades regionales externas tienen mucho que ver con las desigualdades existentes dentro de cada región, de tal manera que estas últimas diferencias podrían explicar, al menos en parte, las distancias entre unas y otras regiones en el caso de un país dado.

Esta hipótesis, en caso de ser cierta, podría contribuir a dar un soporte teórico a las tendencias empíricas anteriormente aludidas que están alimentando hoy las políticas regionales, y que pretenden encauzar a éstas no mediante fórmulas de reparto interregional, sino impulsando *en cada región* las condiciones para su desarrollo económico duradero.

No se trataría, pues, bajo esta perspectiva de que actualmente se estuviera dando prioridad a la eficacia sobre la equidad (ver del Río, 1990); sino de replantear más bien la opción por la equidad bajo una perspectiva diferente que, precisamente, buscaría impulsar ese acortamiento de distancias a partir de las posibilidades, limitaciones, capacidades, etc., de cada región; lo que también tendría algo que ver con la última «fuerza» apuntada por S. Boissier. El fracaso del desarrollo regional convencional y su replanteamiento vía desarrollo local (ver G. Valcárcel-Resalt, 1990), encontraría aquí, también, un buen soporte en que apoyarse.

De este modo, con soportes teóricos adaptados a la propia realidad y más sólidos, se podrían evitar situaciones de subordinación mecanicista a dictados

² M. MARTÍN (1989), pág. 738, ha llamado recientemente la atención acerca de cómo en España «La conocida hipótesis de Williamson respecto a la evolución de las disparidades regionales ha quebrado así después de más de diez años de crisis económica ininterrumpida», al detenerse e incluso invertirse la convergencia interregional en términos de renta familiar disponible por persona iniciada en España durante la etapa del desarrollo económico.

externos y de desconcierto institucional, político y profesional como las denunciadas recientemente por G. Sáenz de Buruaga (1990).

2. DESIGUALDAD INTERREGIONAL E INTRARREGIONAL. EL CASO ESPAÑOL

El análisis de la situación española por Comunidades Autónomas resulta confuso —a los efectos arriba señalados— dada la dispar extensión y población de unas y otras Comunidades, y, sobre todo, por la existencia de diferencias interprovinciales importantes dentro de ellas, lo que puede invalidar determinadas conclusiones.

En este sentido, quizá proceda llevar a cabo un estudio provincializado, analizando regionalmente con posterioridad los resultados obtenidos³.

El procedimiento que se ha seguido consiste en poner en relación, mediante los procedimientos oportunos, la distribución interna de la renta con la situación relativa de cada provincia según algunas variables explicativas de su desarrollo, dentro del conjunto nacional⁴.

Ahora bien, dado que las medidas usuales de desigualdad llevan implícitas funciones de bienestar determinadas, que introducen ciertos sesgos en la pretendida objetividad técnica de las mismas, parece tener sentido centrarnos en la consideración de la mayor o menor importancia que en cada provincia tienen los grupos perceptores de las rentas más bajas, que son en definitiva los que teniendo mayor propensión a consumir disponen de menos recursos para hacer efectiva tal propensión, lo que los coloca en una situación particularmente sugerente desde el punto de vista de la dinámica —potencial y real— de crecimiento regional, al menos según entendía el problema económico J. M. Keynes.

Aceptando, pues, a los efectos anteriores la definición de línea de la pobreza de la Comunidad Europea, que la establece en la mitad de la renta media nacional *per cápita* o familiar, según la unidad estadística con la que se trabaje, se han calculado diferentes índices representativos de la situación relativa de tales grupos dentro de cada provincia y que presentamos, clasificados por Comunidades Autónomas, en la tabla 1, cuyos resultados básicos pasamos a comentar de forma resumida⁵.

³ Podría argumentarse que por la misma razón habría que comarcalizar, pero la inexistencia de datos no lo permite.

⁴ En el trabajo se ha optado por medir las desigualdades internas a través de la distribución de renta familiar provincial, aunque —como es sabido— no es el único camino para ello.

⁵ Los diferentes índices se han elaborado a partir de los datos publicados en la *Encuesta de Presupuestos Familiares 1980-81*, última para la que existen datos desagregados a nivel provincial. Asimismo, la unidad estadística ha sido la familia, y la variable utilizada los ingresos familiares. Con respecto a la consideración de la línea de la pobreza establecida, conviene aclarar que hemos estu-

Tabla 1
Indicadores de pobreza 1980-81 (Z = MM)

Comunidad	Provincia	IB	ID	IS	IT	IF2	IF3	IF4	
Andalucía	Almería	43.0324	35.9518	21.0935	13.2889	15.4709	7.7749	4.5738	
	Cádiz	24.6497	34.3809	11.8261	7.8797	8.4748	4.2698	2.5605	
	Córdoba	28.0297	29.1877	11.4483	7.4100	8.1812	3.5552	1.8694	
	Granada	36.6925	36.1513	18.2440	11.7883	13.2648	6.8227	4.1275	
	Huelva	32.8999	36.7720	16.6040	10.9215	12.0980	6.3373	3.9012	
	Málaga	24.0457	32.8255	11.0384	7.3301	7.8931	3.8219	2.2145	
	Sevilla	25.2382	31.4401	11.1064	7.3130	7.9349	3.7009	2.0755	
Aragón	Jaén	43.2902	37.4114	22.1341	14.0270	16.1955	8.5046	5.2205	
	Huesca	21.1389	27.4857	8.1962	5.4001	5.8102	2.4061	1.2160	
	Teruel	36.4145	32.9349	16.5784	10.5623	11.9931	5.7173	3.2461	
Asturias	Zaragoza	20.9664	34.8567	10.1577	6.8759	7.3082	3.7263	2.2577	
	Asturias	18.4545	33.6787	8.6618	5.8856	6.2152	3.0962	1.8433	
Baleares	Baleares	20.8118	31.6216	9.2006	6.1621	6.5810	3.0993	1.7566	
Canarias	Palmas, Las	22.4175	31.8507	9.9757	6.6500	7.1401	3.3748	1.9168	
	Sta. Cruz	25.8326	31.6497	11.4240	7.5176	8.1759	3.8275	2.1521	
Cantabria	Cantabria	13.8398	27.1009	5.3566	3.5885	3.7507	1.5685	0.8071	
Cataluña	Barcelona	9.5935	27.1223	3.7484	2.5281	2.6020	1.0985	0.5716	
	Gerona	16.0046	30.0315	6.7563	4.5688	4.8064	2.1860	1.2075	
	Lérida	14.4078	30.2459	6.1359	4.1677	4.3578	1.9989	1.1138	
C.-La Man.	Tarragona	18.0942	33.3695	8.4721	5.7319	6.0379	2.9829	1.7636	
	Albacete	31.7708	33.8408	14.9065	9.6985	10.7515	5.2957	3.1041	
	C. Real	43.4771	38.6347	22.9016	14.6008	16.7972	9.0698	5.7045	
	Cuenca	38.9260	32.6212	17.3939	10.9770	12.6981	5.8584	3.1943	
C.-León	Guadalaj.	29.1403	34.8751	14.1074	9.2954	10.1627	5.1399	3.0855	
	Toledo	37.2244	31.6683	16.3199	10.3014	11.7883	5.4227	2.9801	
C.-León	Ávila	40.5696	35.5010	19.6891	12.5053	14.4026	7.1983	4.2260	
	Burgos	19.2530	35.4625	9.4653	6.4621	6.8276	3.5297	2.1643	
	León	30.7833	34.4997	14.7052	9.6313	10.6201	5.3009	3.1378	
	Palencia	20.1938	36.5323	10.2524	6.9833	7.3773	3.8968	2.4323	
	Salamanca	37.3886	34.8188	17.9259	11.4804	13.0183	6.4731	3.8008	
	Segovia	26.1100	27.9325	10.2017	6.6320	7.2932	3.0430	1.5441	
	Soria	33.5979	35.7208	16.5547	10.7945	12.0014	6.1181	3.6798	
	Valladolid	11.2558	28.6028	4.5534	3.1073	3.2195	1.4151	0.7617	
	Zamora	44.7640	33.1761	20.2678	12.4815	14.8509	6.9272	3.8086	
	Extremad.	Badajoz	43.8239	33.8833	20.3485	12.6266	14.8490	7.1323	4.0437
		Cáceres	49.4083	34.1037	22.8683	13.8284	16.8501	7.9860	4.4366
Galicia	Coruña	21.8076	31.1270	9.4910	6.3267	6.7881	3.1551	1.7681	
	Lugo	31.0540	32.5559	14.0091	9.1014	10.1099	4.8067	2.7295	
	Orense	36.8396	34.7996	17.6838	11.3427	12.8189	6.3965	3.7738	
Madrid	Pontevedra	16.4989	33.2619	7.7182	5.2379	5.4878	2.7090	1.6015	
	Madrid	11.8435	29.5750	4.9889	3.3824	3.5027	1.5793	0.8668	
Murcia	Murcia	25.5197	31.5050	11.2331	7.3979	8.0400	3.7616	2.1167	
Navarra	Navarra	10.8947	27.8287	4.3474	2.9338	3.0319	1.3000	0.6845	
País Vasco	Álava	7.4455	25.3691	2.7560	1.8477	1.8889	0.7518	0.3728	
	Guipúzcoa	7.6588	25.0854	2.7493	1.8735	1.9212	0.7615	0.3762	
	Vizcaya	9.5662	27.1092	3.6996	2.5161	2.5933	1.0935	0.5685	
Rioja	Rioja, La	15.7501	30.3665	6.7218	4.5526	4.7828	2.2003	1.2293	
Valencia	Alicante	18.0810	28.7658	7.3518	4.9047	5.2011	2.2740	1.2119	
	Castellón	17.9608	30.5418	7.7062	5.1835	5.4856	2.5259	1.4089	
	Valencia	19.8581	28.5961	7.9809	5.3097	5.6786	2.4619	1.3003	

IB = Indicador básico (% familias por debajo de la línea de la pobreza).

ID = Tasa de desviación.

IS = Indicador de Sen.

IT = Indicador de Takayama.

IFi = Indicadores de Foster.

FUENTE: EPF. INE. Elaboración propia.

Según el indicador más elemental, el indicador básico (IB) —que mide el porcentaje de familias situadas bajo la línea de la pobreza— se pueden clasificar las provincias españolas en tres grandes regiones o áreas:

A. Provincias cuyo IB es menor o igual a 20, es decir, aquéllas con un número de familias situadas por debajo de la línea de la pobreza inferior al 20 por 100 de la población, valor éste que se aproxima a la media nacional. En este grupo se encuentran 18 provincias, entre las que destacan Álava (7,4), Guipúzcoa (7,7), Valladolid (11,3) y Madrid (11,8).

En conjunto, las 18 provincias se encuentran agrupadas en dos grandes áreas: la zona Levantino-Catalana, que abarca las Comunidades de Valencia y Cataluña, con 7 provincias en total; y la Cornisa Cantábrica y territorios adyacentes, con 9 provincias, las que forman las Comunidades de Cantabria, Asturias, País Vasco, Navarra y La Rioja, junto con Burgos y Valladolid, pertenecientes a Castilla-León. A estos dos bloques hay que añadir dos provincias aisladas, Madrid y Pontevedra.

Si se incluyesen en este grupo las 23 primeras provincias (es decir, todas las que poseen un IB inferior a 22), nos encontraríamos con un continuo geográfico que, incluyendo Baleares, arrancaría de Alicante, extendiéndose por la costa mediterránea, frontera con Francia y Cornisa Cantábrica, penetrando hacia el interior por la parte noroccidental de Castilla-León (con la excepción de Soria), La Rioja y Zaragoza. Madrid, en este caso, quedaría relativamente aislada a causa de Segovia⁶, del mismo modo que La Coruña y Pontevedra, a causa de Lugo.

B. El segundo grupo de provincias lo forman aquellas cuyo porcentaje de familias por debajo de la línea de la pobreza (IB) se encuentra entre el 20 y el 30 por 100. Este grupo está formado por 14 provincias, destacando por su mejor situación, como se ha reflejado, Huesca y Zaragoza (ambas de la Comunidad aragonesa), Palencia (de Castilla-León), La Coruña y Baleares.

Por otra parte, hay que señalar que Guadalajara y Segovia sirven de puente

diado, recurriendo al análisis de dominancia, las consecuencias que se derivarían de utilizar otras alternativas, sin que las consecuencias sensibles parezcan importantes desde un punto de vista territorial. Algo análogo puede decirse con respecto a los distintos indicadores señalados, por lo que nos limitaremos a considerar el más sencillo de todos. (Ver ECB, 1989 c. En este mismo artículo se hace referencia a la relación existente entre niveles de pobreza y niveles provinciales de renta por habitante, lo que puede considerarse como un elemento complementario del tratamiento que aquí realizamos.)

Acerca del significado de cada indicador, metodología para su obtención, etc., puede consultarse: A. FERNÁNDEZ MORALES, A. GARCÍA LIZANA y G. MARTÍN REYES (1988); G. MARTÍN REYES, A. GARCÍA LIZANA y A. FERNÁNDEZ MORALES (1989); ECB (1989 a), y A. GARCÍA LIZANA, G. MARTÍN REYES, M. LADOUX AGUILAR y A. FERNÁNDEZ MORALES (1989).

⁶ Lo que no ocurre si la línea de la pobreza se sitúa en el nivel de ingresos máximo percibido entre el 10 por 100 de las familias con menores ingresos a nivel nacional. (Ver Equipo ECB, 1989 a).

entre el área norte y Madrid. Asimismo, al sur se observan dos áreas diferentes en la Península, Andalucía central (formada por Sevilla, Córdoba, Málaga y Cádiz) y la Región de Murcia (esta última como una prolongación de la zona catalano-levantina⁷, perteneciente al primer grupo), además de Canarias. Así pues, es interesante observar cómo salvo Andalucía central y Canarias, el resto de las provincias de este grupo se encuentran en los intersticios o como una prolongación del primer grupo.

C. El tercer grupo abarca al resto de las provincias, que tienen más del 30 por 100 de familias con ingresos inferiores a la línea de la pobreza. El número total de provincias con una situación alarmante y que conforman este último grupo es de 18, destacando entre las mismas, por su peor situación, Cáceres, con un 49,4 por 100 de las familias y Zamora, Badajoz, Ciudad Real, Jaén, Almería y Ávila, con porcentajes comprendidos entre el 40,6 por 100 y el 44,8 por 100.

Como puede observarse, el conjunto de las 18 provincias se encuentran situadas a lo largo de la frontera con Portugal, hasta llegar a Pontevedra (la única provincia de la frontera que se salva de esta dramática situación), extendiéndose hacia el norte por Lugo y León, y hacia el este por Ávila y la totalidad de las provincias de Castilla-La Mancha, a partir de donde existen dos ramificaciones, una hacia el noreste, por Teruel, y otra hacia el sudeste, por Jaén, Almería y Granada. Sólo queda como un caso aislado Soria, aunque hay que advertir que Guadalajara podría considerarse un nexo de unión, ya que ocupa el último lugar del segundo grupo. Considerando pues a Guadalajara, podemos decir que existe un continuo territorial en forma de H, cuyo brazo horizontal se sitúa entre Madrid y el Valle del Guadalquivir, y cuyos brazos verticales descienden de norte a sur, apoyándose el uno en la frontera con Portugal, prolongándose por las provincias occidentales de Castilla-León y las interiores de Galicia hasta el Cantábrico; y el otro en el extremo oriental de la Meseta, penetrando hasta la costa mediterránea oriental andaluza.

El resto de los índices obtenidos, y que se recoge en la tabla 1, arrojan conclusiones semejantes, sólo con algunas excepciones, y por ello no haremos ningún comentario.

En resumen, podemos considerar que las zonas de mayor pobreza en España se sitúan sobre la H descrita, y que existen dos áreas claramente favorecidas, Cataluña-Levante y la zona Cántabro-Pirenaica, con una prolongación más o menos definida hacia Madrid, además de una provincia aislada desde el punto de vista espacial: Pontevedra.

Trasladando tal situación al mapa autonómico (ver mapa 1), pueden detec-

⁷ Esto vendría a corresponderse con la idea manejada por PEDREÑO (1989), en base a otros indicadores demográficos y económicos, acerca del eje de expansión mediterráneo comprendido por los territorios de Cataluña, Comunidad Valenciana y Murcia.

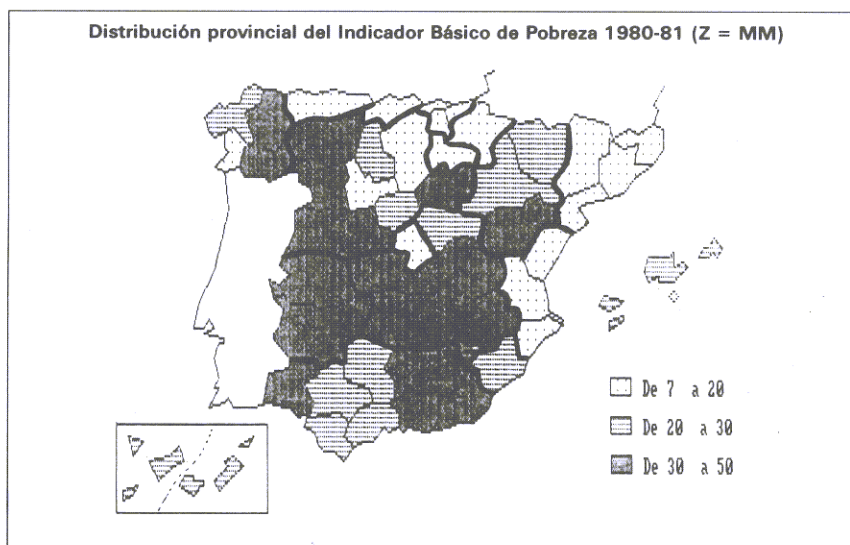


Tabla 2

<i>Características de las CC AA</i>	<i>Comunidades homogéneas</i>	<i>Comunidades con heterogeneidad relativa</i>	<i>Comunidades con una elevada heterogeneidad</i>
<i>Regiones definidas según los niveles de pobreza</i>			
Región A	Cataluña, La Rioja, Valencia, Cantabria, P. Vasco, Asturias, Madrid, Navarra.		Castilla-León
Región B	Baleares Murcia Canarias	Andalucía Aragón Castilla-La Mancha	Galicia
Región C	Extremadura		

tarse importantes conclusiones sobre la dispar situación de unas Comunidades y otras. Éstas pueden agruparse en cinco apartados diferentes, según su homogeneidad⁸ o heterogeneidad provincial interna, y los niveles de pobreza detectados en sus provincias (ver tabla 2).

⁸ Obsérvese que la mayor parte de las Comunidades caracterizadas por su homogeneidad interna son uniprovinciales en su mayoría o tienen sólo dos (dos casos), tres (dos casos) o cuatro provincias (un caso).

1.—Comunidades Autónomas caracterizadas por niveles de pobreza muy bajos en todas sus provincias: País Vasco, Navarra, La Rioja, Cantabria, Asturias, Cataluña, Valencia y Madrid.

2.—Comunidades Autónomas caracterizadas por la existencia de niveles intermedios en todas sus provincias: Baleares, Murcia y Canarias.

3.—Comunidades Autónomas caracterizadas por altos niveles de pobreza en todas sus provincias: Extremadura.

4.—Comunidades con provincias situadas en los dos niveles inferiores: Andalucía, Aragón y Castilla-La Mancha.

5.—Comunidades que encierran provincias pertenecientes a los tres niveles de pobreza considerados: Galicia y Castilla-León.

Del análisis de resultados se desprende que las áreas más desfavorecidas ocupan la mayor parte del territorio. Esto es, sin duda, un motivo preocupante.

3. LAS RAÍCES DE LA DESIGUALDAD

Ante la situación descrita, es inmediato el preguntarse por los motivos que llevan a tales disparidades territoriales, en lo que a distribución interna de la renta se refiere. Más en concreto. A qué se debe que haya más o menos familias percibiendo ingresos que las sitúan por debajo de la línea de pobreza.

En primer lugar, es obvio que los ingresos pueden tener su origen en el trabajo personal, el capital poseído, donativos y becas, remesas de emigrantes, pensiones y subsidios, etc. De todas estas fuentes, podemos considerar como particularmente significativas las rentas de capital, las rentas de trabajo y las ayudas procedentes de la Seguridad Social. Sin embargo, en la medida en que tratamos de analizar a los perceptores de ingresos reducidos, es razonable suponer que las rentas de capital pierdan significado y que, por tanto, sus ingresos vengan fundamentalmente o del trabajo o de la Seguridad Social.

Que en una determinada provincia sea mayor que en otras el número de familias con bajos ingresos podría ponerse, a su vez, en relación con dos hechos básicos: 1) que en dicha provincia el porcentaje de los perceptores de rentas dentro del conjunto de la población sea menor que en las restantes; y 2) porque las rentas percibidas en la provincia sean muy bajas en términos generales.

Que haya pocos perceptores de *rentas de trabajo* puede deberse, a su vez, a dos motivos: a la existencia de altas tasas de paro o, con independencia de ello, a que haya una tasa de actividad reducida, y, por tanto, poca población dispuesta a trabajar o en condiciones de hacerlo. Esto último tiene que ver, por otro lado, con la situación demográfica provincial, es decir, con el peso que tenga la población potencialmente activa y con el grado de envejecimiento de la sociedad. A mayor población potencialmente activa y menor envejecimiento,

debe esperarse una mayor tasa de actividad... Pero siempre que las circunstancias económicas sean favorables.

En efecto, la decisión de los potencialmente activos de entrar o no en el mercado de trabajo o ser empresarios y convertirse, por tanto, en efectivamente activos, está muy condicionada por sus expectativas de encontrar empleo en condiciones razonables o tener éxito en los negocios. En la medida en que la evidencia inmediata sea contraria a tal posibilidad (lo que vendrá puesto de relieve, entre otras cosas, por la existencia de tasas elevadas de desempleo) muchos individuos no se molestarán siquiera en engrosar las filas de los que buscan trabajo. Esto parece tener más fuerza en el caso de la población femenina, ya que la masculina, por obvios condicionamientos sociales, optará, en general, por incorporarse a la población activa sean cuales sean las circunstancias económicas.

No hay que olvidar, por otro lado, que la existencia de una población envejecida y una reducida población potencialmente activa, al menos en España, tiene mucho que ver con los movimientos migratorios, que han ido desplazando a la población más joven y preparada desde las zonas con menos posibilidades a las más prósperas, lo que refuerza las pocas posibilidades de aquellas áreas geoeconómicas afectadas por el problema.

Parece claro, por tanto, que la situación económica general, se convierte en elemento clave para entender las diferencias interterritoriales en términos de no bienestar⁹.

Sin embargo, conviene hacer aún algunas precisiones adicionales, ya que el paro no sólo depende de la situación económica, sino que, en las circunstancias actuales, también se ve influido por la capacidad de los sujetos para adaptarse a las nuevas exigencias del mercado. Es decir, el paro viene provocado porque no se ofertan suficientes puestos de trabajo; pero también, porque aquellos que se ofertan no encuentran mano de obra adecuada para ocuparlos, con los niveles de cualificación correspondientes y suficientemente versátil para adaptarse a las condiciones cambiantes que la tecnología actual, etc., imponen. Por otra parte, tal falta de cualificación, en la medida en que está más generalizada en una determinada área, implica menos posibilidades de innovación y diversificación económica y, por tanto, de generación de nuevas actividades productivas en el campo de la industria y los servicios.

Un factor importante —aunque hay otros— que se encuentra detrás de la falta de cualificación es, sin duda, el analfabetismo y su mayor o menor extensión social.

Ahora bien, como apuntábamos más arriba, hay un segundo elemento a tener en cuenta para una explicación más completa de los niveles de pobreza o

⁹ Sobre el concepto de «no bienestar» puede verse la bibliografía señalada en la nota 3.

no bienestar. Nos referimos a la cuantía media provincial de las rentas procedentes del trabajo. Que dichas rentas sean bajas, puede deberse a razones personales (falta de cualificación profesional) o sectoriales (predominan las ocupaciones en sectores de baja rentabilidad, especialmente en la agricultura), sin olvidar que desde un punto de vista económico general, y en una primera aproximación, es fácil suponer que las rentas tiendan a ser más bajas en la medida en que el paro sea mayor y/o la población activa menor. En lo que se refiere a la especialización sectorial, en concreto, no habría que perder de vista la incidencia de la tasa de envejecimiento de la población, así como el analfabetismo y la falta de cualificación, en la mayor importancia del empleo en la agricultura, con lo que se están reforzando a sí mismas las razones que llevan a un aumento de la proporción del número de familias situadas bajo la línea de no bienestar.

Los factores apuntados aclaran, también, lo que ocurre con las rentas procedentes de la Seguridad Social. Menores tasas de actividad y mayores tasas de paro deben traducirse en un mayor peso de estas rentas, sean subsidios de desempleo, viudedad, enfermedad o jubilación, incluida la anticipada. En la medida en que tales subsidios representan usualmente ingresos inferiores a las rentas salariales, más paro o más población inactiva (en términos generales, o desagregando por grupos significativos) implicarán menores ingresos para las familias. Si tenemos en cuenta, por otra parte, que la cuantía del subsidio está ligada con el valor de las rentas percibidas mientras los sujetos estuvieron empleados, parece obvio pensar que en la medida en que tales ingresos sean bajos, deberán serlo igualmente los subsidios. Por tanto, el problema se transfiere a las causas que explican el nivel de las rentas del trabajo.

4. ANÁLISIS EMPÍRICO

A la vista de las relaciones teóricas apuntadas, puede concluirse que la existencia de más o menos familias con bajos ingresos depende de diferentes variables, a todas las cuales es razonable imputar parte de la causalidad de la situación: paro, tasa de actividad, cualificación de la población, importancia de la agricultura, etc.

Pero lo que nos interesa es profundizar sobre el particular, a fin de *discriminar la influencia relativa que cada factor tiene dentro del conjunto*, lo que puede hacerse mediante el «análisis de influencias» (o *path analysis*, en terminología anglosajona), a partir de un sistema de ecuaciones simultáneas (ver A. García Lizana, G. Martín Reyes, M. Ladoux Aguilar y A. Fernández Morales, 1989).

Mediante tal procedimiento analítico se han detectado las influencias o impactos de cada variable, tanto directos, indirectos (a través de otras variables), así como los totales (la suma de los anteriores), según aparecen recogidos en la tabla 3.

Tabla 3

Efectos sobre el Indicador Básico

TA	Directo	-0.2331
	Total	-0.2331
TP	Directo	0.2096
	Indirecto:	
	Vía TA.....	0.0677
	Total	0.2773
EAG	Directo	0.5605
	Indirecto:	
	Vía TA.....	-0.1127
	Vía TP.....	-0.1247
	Vía TP-TA.....	-0.0403
Total	0.2828	
TANA	Directo	0.3367
	Indirecto:	
	Vía TP	0.1235
	Vía TP-TA.....	0.0399
	Vía EAG.....	0.2235
	Vía EAG-TP.....	-0.0449
	Vía EAG-TP.....	-0.0497
	Vía EAG-TP-TA	-0.0016
Total	0.6274	
P3	Directo	0.2479
	Indirecto:	
	Vía TA.....	0.1752
	Vía EAG.....	0.4005
	Vía EAG-TA	-0.0805
	Vía EAG-TP.....	-0.0891
Vía EAG-TP-TA	-0.0288	
Total	0.6252	
P2	Indirecto:	
	Vía TA.....	-0.1218
	Total	-0.1218

TA: Tasa Actividad; TP: T. Paro; EAG: Empleo Agric.; TANA: T. Analfabetos; P3: Poblac. > 65; P2: Poblac. entre 25 y 65.

A medida que el valor del coeficiente relativo a cada impacto alcanzado es mayor, es asimismo más fuerte la incidencia de la variable correspondiente sobre el nivel de pobreza de la provincia, medido a través del Indicador Básico. Asimismo, si el signo es positivo quiere decir que la relación es directamente proporcional. Si es negativo, la relación es inversa.

5. UNA VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS

De la comparación de los *efectos directos* de las variables consideradas sobre IB, se observa que corresponde al porcentaje de empleo agrícola la

mayor influencia, seguido de la tasa de analfabetismo, población mayor de 65 años, tasa de actividad y tasa de desempleo. Prescindiendo de la proporción de la población con edad comprendida entre 16 y 65 años, que no tiene impacto directo sobre el nivel de pobreza o «no bienestar» registrado, es el paro la variable con menor influencia directa entre todas las consideradas¹⁰ en contra de la afirmación tópica sobre las relaciones entre el paro y la pobreza.

Más significativos, quizá, son los *efectos totales*. Es decir, la influencia directa de cada variable sobre IB más (o menos) las influencias que ejerce a través de las demás variables del modelo.

En este caso, las variables que más influyen sobre el indicador de no bienestar son el *porcentaje de personas mayores de 65 años* y la *tasa de analfabetismo*. Pierde parte de su relevancia el empleo agrícola, avanzando, sin embargo, ligeramente la influencia atribuible al desempleo, aunque sigue ocupando una posición secundaria.

Posiblemente, la baja relevancia de la tasa de actividad, que presenta sin embargo una correlación con IB muy alta (ver A. García Lizana, G. Martín Reyes, M. Ladoux Aguilar y A. Fernández Morales, 1989), puede deberse en parte a que su protagonismo ha sido absorbido por los jubilados, uno de los segmentos más importantes de los inactivos, con lo que continuaría siendo válida la apreciación (entiéndase dentro de su contexto la misma) de que «los pobres no son los parados, sino los inactivos» (ver G. Martín Reyes, A. García Lizana y A. Fernández Morales, 1989). De manera más precisa, lo que se quiere decir es que:

1.—Aquellas provincias que presentan mayores niveles de pobreza (en términos de ingresos percibidos) no son necesariamente las que tienen más paro.

2.—La influencia del paro sobre la pobreza resulta bastante limitada en relación con la que tienen otras variables, y en concreto la tasa de envejecimiento de la población.

Si hubiéramos podido considerar no sólo a los mayores de 65 años, sino a todos los jubilados (incluidos los anticipados, incapacitados, etc.), la importancia del efecto debería ser mayor. De aquí los posibles peligros de las políticas de reducción artificial de la población activa (jubilaciones anticipadas, etc.). En todo caso, la no percepción de ingresos por parte de los jubilados o el reducido montante de los percibidos son la explicación más inmediata de su impacto directo sobre IB. Pero obsérvese que los efectos indirectos son mayores, lo que podría relacionarse con la pérdida de creatividad, capacidad de innovación, dinamismo, etc., que el envejecimiento e inactividad de la población acarrea.

¹⁰ La explicación de ello puede estar, junto con otras circunstancias, en el hecho de que parte de los registrados como parados son jóvenes pertenecientes a familias con un cierto nivel de ingresos, lo que hace que disminuya el impacto del paro en términos agregados.

La *tasa de analfabetismo* se convierte, por otro lado, en uno de los elementos más importantes del modelo. Aunque a través de su impacto sobre el empleo agrícola (a mayor importancia del analfabetismo, mayor proporción de población empleada en el sector primario) tiene algunos pequeños efectos beneficiosos (paradójicamente si se quiere) sobre IB, por las razones que después veremos, la suma de sus influencias directas e indirectas (a través de su impacto en el empleo agrícola, el paro y la actividad), sobre el nivel de pobreza es la mayor ¹¹.

El análisis de la influencia de la estructura económica medida a través del porcentaje de empleo agrícola, resulta particularmente interesante. La destacada influencia directa que se observa sobre IB podría ponerse en relación con el bajo nivel de las rentas de los pequeños agricultores y de los peones agrícolas. Sin embargo, obsérvese que los efectos indirectos son negativos. Esto es, a más empleo agrícola, menos pobreza. Ello puede tener que ver con el hecho de que los datos manejados se refieren a 1980-81, un momento particularmente delicado para el sector industrial. Según ello, las zonas con mayor peso relativo de la agricultura podrían haber visto mitigados en parte, obviamente, sus niveles de pobreza, a través de los efectos positivos —siempre en términos relativos— de la agricultura sobre el empleo y la actividad.

6. SITUACIÓN ACTUAL

Dado que la EPF con un grado de información suficiente a nivel provincial se realiza muy de tarde en tarde, puede ser de interés estudiar la situación territorial real de la distribución personal de la renta referida a fechas más cercanas, mediante el análisis de las variables que según se ha señalado explican, al menos en parte, las disparidades interprovinciales detectadas.

En la tabla 4 aparecen recogidas las medias y desviaciones estándar de la tasa de analfabetismo, porcentaje de población mayor de 65 años, tasa de paro, tasa de actividad y porcentaje de población agrícola para el año 1981, así como para 1989 las variables referentes a la situación laboral y para 1986 la tasa de analfabetismo y población mayor de 65 años.

Del análisis de estos resultados se desprende que la situación española ha mejorado en términos generales entre ambas fechas, a excepción del paro y del envejecimiento de la población. Sin embargo, si dichos resultados se analizan con un criterio regional se desprende que las disparidades han podido

¹¹ Por tanto, una política sistemática, seria y potente de educación de adultos se convierte, por lo dicho (aunque también lo sea por otras razones), en una herramienta particularmente atractiva para luchar contra la pobreza. Que haya obreros de la construcción en paro y falta de viviendas era para Keynes el mayor de los absurdos; que hay maestros y licenciados en paro y personas con educación insuficiente es hoy —sin lugar a dudas— otro absurdo de análoga o mayor magnitud.

Tabla 4

	<i>Tasa analf.</i>		<i>Pobl. > 65 años</i>		<i>Tasa paro</i>		<i>Tasa acti.</i>		<i>Porc. P. agraria</i>	
	1981	1986	1981	1986	1981	1989	1981	1989	1981	1989
Media.....	65,2	40,4	12,6	13,6	11,9	17,5	47,4	48,3	26,6	19,1
Desviación estándar	37,7	26,6	2,7	3,03	5,0	6,9	4,8	3,6	13,9	11,7
Coef. de variación....	57,8	65,8	21,4	22,2	42,0	39,4	10,1	7,4	32,2	61,2

aumentar en relación con 1981. Así, la tasa de analfabetismo que presenta una disminución notable (su media pasa de 65,2 a 40,4 por 100), presenta un coeficiente de variación en 1986 del 65,2 frente al 57,8 que presentaba en 1981, lo que implica que hay menos analfabetos, pero el ritmo de reducción, distinto en cada provincia, hace que en términos relativos aumenten las diferencias interprovinciales (de acuerdo, por supuesto, con el coeficiente de variación como medida de desigualdad). Lo mismo puede decirse de la población mayor de 65 años y la población agrícola, aunque ocurre lo contrario con las tasas de paro y actividad¹².

Ahora bien, siendo las dos primeras variables reseñadas las que más influyen, según nuestro análisis, en la desigual distribución territorial de la pobreza, se podría deducir a través de estos datos, tomados como indicadores, que las disparidades interprovinciales en determinados casos, al menos, han debido crecer y que, de cualquier manera, y en términos generales, la estructura general no parece presentar una excesiva variación con la situación de la desigual distribución regional de la pobreza 1980-81. Sin embargo, está claro que ello debe ser matizado en función de unas y otras Comunidades Autónomas.

Así, de nuestro análisis se desprende una sensible mejora en lo que a Andalucía se refiere ya que, si bien Jaén sigue confirmando su posición marginal, Granada y Almería alcanzan niveles relativos más favorables. Canarias es otra Comunidad cuya situación mejora. Sin embargo, Extremadura y Castilla-La Mancha permanecen a distancia del resto, las llamativas desigualdades interprovinciales de Galicia y Castilla-León siguen siendo una realidad, y las posiciones más aventajadas de Cataluña, País Vasco, Madrid, etc., continúan existiendo.

Los datos, como puede verse, confirman los estudios más recientes sobre el reforzamiento económico del corredor mediterráneo y Canarias y el endurecimiento de las condiciones del interior (Cuadrado, 1988; o el último estudio

¹² Con otro enfoque, sólo se verifica que existe diferencia de variación en la tasa de analfabetismo y la tasa de paro. Respecto a las otras variables no se puede hablar estadísticamente de incremento ni disminución de variancias. Esta aparente contradicción se debe a que cada una de estas medidas procede de diferentes funciones de bienestar. El análisis que prosigue, por tanto, matiza en función del territorio más que considerar la medida globalizadora.

anual del FIES); también ponen de relieve la persistencia de graves problemas regionales, así como la conexión entre las desigualdades interregionales y las desigualdades internas de cada territorio, lo que exigiría, por tanto, la consideración de estas últimas en las tareas de investigación y en el abordaje político de los problemas regionales.

BIBLIOGRAFÍA

- S. BOISSIER (1982): *Política económica, organización social y desarrollo regional. Elementos para armar una teoría del desarrollo regional*, ILPES, Santiago de Chile.
- J. R. CUADRADO (1988): «Tendencias económico-regionales antes y después de la crisis en España», *Papeles de Economía Española*, 34, 17-60.
- ECB (1989 a): «El contexto socioeconómico de la pobreza en España», *Cáritas*, 288, 15-26.
- (1989 c): «La riqueza y la pobreza bajo una perspectiva regional», *Documentación Social*, 76, 101-124.
- A. FERNÁNDEZ MORALES, A. GARCÍA LIZANA y G. MARTÍN REYES (1988): «Técnicas para la medición de la pobreza y de su distribución territorial en España», *Comunicaciones a la XIV Reunión de Estudios Regionales*, AEER, Málaga.
- A. GARCÍA LIZANA, G. MARTÍN REYES, M. LADOUX AGUILAR y A. FERNÁNDEZ MORALES (1989): «Employment, unemployment and poverty in Spain», *15th Symposium on Social Welfare*, Noordwijkerhout (Holanda).
- J. M. KEYNES (1983): *The General Theory of Employment, Interest and Money*, Macmillan-Cambridge University Press, Cambridge.
- G. MARTÍN REYES, A. GARCÍA LIZANA y A. FERNÁNDEZ MORALES (1989): «La distribución territorial de la pobreza en España», CEBS, *La pobreza en la España de los 80*, Ed. Acebo, Madrid.
- M. MARTÍN RODRÍGUEZ (1989): «Evolución de las disparidades regionales: Una perspectiva histórica», J. L. GARCÍA DELGADO (director): *España, economía*, Espasa-Calpe, Madrid.
- G. MYRDAL (1957): *Economic Theory and Underdeveloped Regions*, Durkworth, Londres. (Versión castellana: FCE, México, 1959).
- A. PEDREÑO MUÑOZ (1989): «Un eje de expansión económica», J. L. GARCÍA DELGADO (director): *España, economía*, Espasa-Calpe, Madrid.
- C. DEL RÍO (1990): «La evolución de la política regional», *ICE*, 679, 7-26.
- G. SÁENZ DE BURUAGA (1990): «Tres novedades, tres, en la feria regional de España», *Economistas*, 41, 254-259.
- G. VALCÁRCEL-RESALT (1990): «El desarrollo local en España. Un enfoque estratégico para la reactivación de áreas desfavorecidas», *ICE*, 679, 75-94.
- J. C. WILLIAMSON (1965): «Regional inequality and the process of national development: a description of the patterns», *Economic Development and Cultural Change*, vol. 13, 3-45. [Reproducido en español en L. Neldeman (1972): *Análisis Regional*, Tecnos, Madrid.]

